



Coyuntura argentina en el marco de la Pandemia COVID19

Agosto 2020

La victoria del Frente de Todos (Fernández – Fernández) en las elecciones de octubre de 2019, por un 48% contra el 40% del macrismo, marcó el final abrupto del gobierno de Cambiemos, la coalición de centroderecha que había llegado al poder en 2015. Macri tuvo el dudoso honor de convertirse en el primer presidente argentino que no logró ser reelegido desde que se habilitó esa opción, hace 70 años. El virtual debilitamiento de cambiemos, parece dejar sin representación política a las corporaciones económicas que no obstante no renuncian y acentúan sus presiones sobre el poder político operando desde el conglomerado de medios de comunicación y sectores de la justicia.

Macri dejó un país devastado, con una deuda pública equivalente al 89,4 % del Producto bruto Interno – el mayor valor desde el año 2004 - y en virtual Default (prorroga de pagos); una desocupación cercana al 10 %, y niveles de pobreza del orden del 40,8%. Según los datos del Balance Cambiario del Banco Central (BCRA), la fuga de capitales en todo el 2019 fue de U\$S 26.870 millones, quedando muy cerca del récord histórico de 2018. En la era completa de Mauricio Macri, el atesoramiento de dólares llegó a U\$S 88.371 millones.

Las primeras medidas del nuevo gobierno (en el primer mes de su gestión) apuntaron a fortalecer la economía de los sectores más desfavorecidos y a estimular la reactivación del mercado interno. Treinta medidas económicas que comprendieron desde definir pautas para la renegociación de la Deuda, decretar la emergencia económica, promover un nuevo pacto fiscal, alícuotas para Bienes Personales, congelamiento de tarifas de servicios públicos, plan de regularización para deudas tributarias de PYMES, adicional para los beneficiarios de Asignación Universal por Hijo y aumento salarial por decreto, control de cambio incorporando la modalidad del Dólar Solidario para gastos en el exterior, etc.

La Deuda

La deuda pública total alcanza los US\$ 323 mil millones, según los últimos datos del Ministerio de economía (mes de marzo último), lo que a finales del año 2019 representaba un 89,4 % del PBI. En 2015 cuando asume Macri representaba el 52,6%.¹

¹ De estos US\$ 323 mil millones, el 40% Estado nacional se los debe a otras agencias del sector público (provincias u organismos como ANSES que poseen Nonos del Estado nacional), por lo que se considera más fácil de negociar; mientras el 37% está en manos de privados (Fondos de Inversión nacionales o extranjeros) y un 23% (organismos bilaterales o multilaterales como FMI, BID)

Tras una larga negociación en la que el gobierno se propuso hacer un acuerdo que permita la sostenibilidad de la deuda, la República Argentina y los representantes del Grupo Ad Hoc de Bonistas Argentinos, el Comité de Acreedores de Argentina y el Grupo de Bonistas del Canje y otros tenedores (en conjunto, los "Acreedores que brindan Respaldo") llegaron a un acuerdo que les permitirá a los miembros de los tres grupos de acreedores apoyar la propuesta de reestructuración de deuda de Argentina y otorgarle a la República un alivio de deuda significativo. La reestructuración permitirá reducir el interés que pagan los títulos externos; a partir del canje enfrentar vencimientos de los títulos externos por 4500 millones de dólares en los próximos 5 años en lugar de los 30.200 originales. Considerando el mismo trato para la deuda bajo legislación local, el alivio financiero para los próximos 5 años totaliza los 42.500 millones de dólares. No obstante el acuerdo alcanzado, aún queda por renegociar su deuda con el FMI, al que se le debería pagar cerca de US\$ 50 mil millones entre 2021 y 2024.

La Pandemia

El primer caso confirmado de la pandemia de enfermedad por coronavirus de 2019-2020 en Argentina se dio a conocer el 3 de marzo de 2020.

La respuesta sanitaria del gobierno para enfrentar la pandemia se caracterizó por una cuarentena (aislamiento) temprana y estricta que abarcó todo el país seguida de una flexibilización por regiones. El Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), se decretó a partir del día 20 de marzo, y se mantuvo en todo el país hasta el 12 de abril inclusive (24 días). A partir de allí y debido a que Argentina es un país federal, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires quedaron facultadas para solicitar ser exceptuadas de la cuarentena, fijando protocolos de prevención, estableciendo áreas sin cuarentena propiamente dicha, bajo un régimen llamado de "distanciamiento social" graduado en fases flexibles, que abarcaron la mayor parte del territorio nacional. Hacia la segunda quincena de junio de 2020, solo cinco áreas urbanas mantenían el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio.

Para enfrentar la pandemia, Argentina, adoptó una serie de medidas sanitarias, económicas y sociales, consensuadas entre el gobierno nacional, todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La estrategia socioeconómica central del gobierno buscó preservar y garantizar el acceso de toda la población a los alimentos y servicios esenciales (energía, comunicaciones, asistencia médico-farmacológica, seguridad y transporte esencial), así como evitar los despidos y asistir a las empresas.

Fueron parte de esta estrategia: una serie de medidas de emergencia (emisión monetaria, subsidios a personas y empresas, bolsones de alimentos, tarjetas alimentarias, prohibición de despidos, desalojos y corte de servicios públicos, créditos, desgravaciones impositivas) con el fin de garantizar que toda la población perciba un mínimo de ingresos y acceda a los alimentos, preservar los empleos y evitar que quiebren las empresas. Entre las medidas económicas adoptadas se destacan el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y la

Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP). El IFE² es una suma fija para cada trabajador informal o autónomo de bajo ingreso, mientras que la ATP³ es una batería de herramientas de asistencia para las empresas, que incluye desgravaciones impositivas, créditos blandos y subsidios. Prohibición de despidos y suspensiones unilaterales por 120 días; Créditos a tasa cero. Se abrió una amplia línea de créditos a tasa cero para trabajadores autónomos; etc. A esto se le suman algunas medidas complementarias adoptadas por las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Violencias en contexto de aislamiento social

El tiempo transcurrido en la pandemia y las distintas modalidades de confinamiento (doméstico y barrial) ha implicado el incremento de las violencias. Por una parte, en el espacio público por parte de fuerzas de seguridad y otras (paramilitarismo) según los diferentes contextos. Particularmente en periferias de las ciudades pero también en los parajes rurales o semi rurales, el incremento del control por parte de las fuerzas de seguridad ha asestado con mayor crueldad sobre los jóvenes de sectores populares. El caso de desaparición de Facundo Castro en provincia de Buenos Aires, con fuertes sospechas sobre la policía bonaerense, es paradigmático. La violencia institucional a la que se han visto sometidos, por transitar por la vía pública, por estar fuera de sus casas, por intentar ejercer sus actividades laborales de subsistencia, aparecieron rápidamente.

También han sido particularmente relevantes las situaciones de vulneración de derechos y de violencias a las que se han visto sometidas las personas que se encuentran en contextos de encierro. Las crisis carcelarias en diferentes lugares del país han sido enfrentadas con altos niveles de violencia institucional

Violencias de género y etáreas. Políticas de atención a la problemática.

Por su parte, el ámbito doméstico también ha sido escenario de múltiples violencias. Las desigualdades de género y etáreas a las que cotidianamente se han visto sometidas mujeres, personas trans y niñas y adolescentes, con el confinamiento doméstico las mismas se han traducido en distintas formas de violencias, con un incremento marcado de las mismas hacia mujeres, jóvenes, adolescentes y niñas. El aumento de femicidios como dato objetivo, da cuenta de una de las formas de violencias. Pero también situaciones críticas también han sido constantes situaciones de crisis de intentos de suicidios, depresión juvenil, entre tantas otras manifestaciones.

Particularmente la violencia de género ha sido objeto de algunas políticas desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades. Sin embargo, y a pesar de esfuerzos de coordinación, con gobiernos provinciales y municipales, estas violencias no han cesado

² Establece un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), de \$10.000 (150 dólares aprox.) para trabajadores informales y monotributistas sin ingresos. El IFE se suma a la ya existente Asignación Universal por Hijo (AUH), de unos \$3000 (unos 50 dólares) para los sectores con ingresos familiares menores a \$50.000 por mes (unos 750 dólares).

³ El Estado nacional abonó la mitad de los salarios del personal en actividad o suspendido por fuerza mayor consensuadamente con el trabajador o el sindicato (art. 223 bis Ley de Contrato de Trabajo), mediante un Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP). Los ATP sumaron \$141 mil millones entre abril, mayo y junio (0,54% del PBI)

Educación en el contexto de pandemia

El contexto actual de aislamiento (obligatorio o no) y/o de distanciamiento social por la pandemia del COVID 19, ha reconfigurado de modo abrupto las relaciones sociales en los diversos órdenes en que las personas desarrollamos la cotidianidad de nuestras vidas.

Sin demasiadas herramientas para adecuarnos a cambios de tal magnitud, sumergidos en un orden en el que el miedo reconfigura y organiza la mayor parte de nuestros comportamientos, los sistemas educativos han intentado *continuar* con uno de sus principales cometidos en las sociedades actuales: ser uno de los sistemas que con mayor alcance impregna las trayectorias vitales de los sujetos como así también las vidas cotidianas de los “hogares”. Aún quien/es nunca hayan transitado por un ámbito educativo, lo tienen seguramente como aspiración, como deuda, como derecho no cumplido.

Es por ello que en la mayor parte de nuestros países, en todos los niveles educativos y en todas las modalidades el imperativo fue “no parar” que no ocurriera “el vacío educativo”. Pero resulta que ese no parar y no quedar en suspenso, llevó a una frenética necesidad de que transcurriera la vida escolar a través de la virtualidad. Esos dos cambios: el de la escuela, el centro educativo, la universidad o el espacio institucional que fuera, por el de la “casa” y el de la presencialidad por el de la virtualidad, puso al descubierto viejos problemas con el que el sistema educativo tenía modos de lidiar.

Si bien en todos los niveles, modalidades y ámbitos educativos, puso al desnudo las desigualdades de diverso orden que rigen nuestras sociedades, en particular en algunas de las modalidades esto fue más brutal y contundente. Tal es el caso de la educación de personas jóvenes y adultas (EPJA). La desigualdad económica y traducida ésta en desigualdad de acceso tecnológico y de conectividad fue la que emergió en primera instancia. Pero además emergieron y saltaron a la vista otras desigualdades que rápidamente se tradujeron en violencias múltiples.

Asimismo para los/las docentes, sobre todo mujeres, las condiciones de ejercicio de su labor docente también se ha visto totalmente trastocada y sus cotidianidades y condiciones subjetivas altamente violentadas. Las implicancias que el confinamiento doméstico (el ámbito menos democratizado desde el punto de vista de las relaciones de género) tiene para mujeres que deben cumplir con labores educativas a través del trabajo remoto ha tenido un alto costo en salud y condiciones vitales. El desdibujamiento de fronteras entre lo doméstico y lo laboral, sobre todo para quienes además de ser trabajadoras están a cargo de las crianzas de niños y/o cuidados de personas mayores viene trayendo un alto costo en sus condiciones de salud física y mental, como así también el deterioro en sus relaciones y vínculos cotidianos.

Alcance de las políticas socioeconómicas de mitigación en el contexto de la pandemia

El IFE tuvo un papel destacado en cuanto a la ampliación de un piso mínimo de ingresos de subsistencia para enfrentar la crisis. No menos importante, fue la tarjeta alimentaria, alcanzando a más de 1,5 millón de hogares vulnerables en todo el país.⁴

En ambos tipos de ayuda los principalmente receptores fueron los hogares más pobres, trabajadores informales, jóvenes y mujeres de baja calificación laboral, en fin, los segmentos sociales estructuralmente excluidos de la economía formal.

Pero si bien estas medidas son necesarias para amortiguar el impacto de la caída sobre las condiciones de vida, ellas no bastan para evitar la destrucción de empleos en la economía informal, el aumento de la inseguridad alimentaria y el aumento del empobrecimiento, en especial, entre los sectores sociales que se ven impedidos de mantener sus actividades laborales en el actual contexto. En el caso del IFE, más de 8 millones de trabajadores-hogares quedaron habilitados para recibir este beneficio, dando cuenta no sólo del estado de necesidad económica de la población frente a la crisis, sino también de la limitación estructural del modelo capitalista argentino para darle inclusión a través de empleos plenos al conjunto de los 20 millones de trabajadores potenciales de nuestro país. En la Argentina, el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) fue revelador al respecto. El mismo fue concebido desde la política pública como un subsidio temporario para amortiguar las consecuencias económicas del aislamiento preventivo y obligatorio en los sectores más vulnerables de la sociedad. Sin embargo, mostró la precariedad laboral que estructura la vida de la mitad de la Población Económicamente Activa.

La cantidad alcanzada en primera instancia por el IFE fue de 8,7 millones de personas (de un universo de 12 millones que los solicitaron), de los cuales 2.4 millones son a su vez receptores de la AUH o Asignación por Embarazo, mientras que los otros 6,3 millones de beneficiarios se componen en un 82 por ciento de trabajadores informales; 8,4 por ciento por monotributistas de bajos ingresos y 2,4 por ciento de trabajadoras domésticas, según datos de ANSES.

Según datos del INDEC, la caída de la actividad económica en lo que va del año acumuló un 5,4%. Las proyecciones indican que se perderán más de 450.000 puestos de trabajo. Pese a los esfuerzos de asistencia implementados por el gobierno, los hogares más pobres son los que más sufren el impacto socio-económico de la pandemia en sus múltiples dimensiones (pérdida de ingresos, inseguridad alimentaria, falta de acceso a internet lo que afecta el acceso a la educación o a posibilidades laborales a distancia para los jóvenes). El impacto económico reconoce además dinámicas particulares según género y perfil etario, Según datos del INDEC, en el primer trimestre del año el 40% de jóvenes entre 16 y 29 años carecen de empleo formal. El actual contexto ha causado un aumento de la demanda de trabajo de cuidados no remunerado, profundizando aún más las desigualdades ya existentes en la división del trabajo por género; son las mujeres de todas las edades pero particularmente las más jóvenes, las que proporcionan el grueso de la atención no remunerada a las personas mayores, hombres o mujeres.

La pandemia impactó fuertemente también en las economías regionales. Sólo uno de cada tres pequeños y medianos productores opera con normalidad la cosecha y la producción. Se trata del sector que "abastece a la mesa diaria de los argentinos con frutas, verduras, carnes, leche y arroz, entre otros alimentos", según establece el informe que elaboró la

⁴ Al examinar el alcance de las medidas se observa que el 48 por ciento de los hogares del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) recibieron alguna ayuda social durante el período de aislamiento social obligatorio (IFE, bonos extraordinarios a AUH, bono para jubilados y Tarjeta Alimentar). Asimismo, el 16,8 por ciento de unidades domésticas del AMBA declaró haber recibido algún bolsón, vianda o haber retirado alimentos de comedores escolares o comunitarios.

Confederación de la Mediana Empresa (Came). La mitad produjo parcialmente y un 10 por ciento no cosechó, aun en temporada. Por la falta de producción y ventas, los productores necesitan 812 millones de dólares en capital de trabajo para "mantener la subsistencia", agrega un documento, que fue elevado al Ministerio de Agricultura.

Resultados de la estrategia sanitaria.

Al 17 de agosto del 2020, 299.113 casos confirmados, 38.433 caso en investigación, 5.814 fallecidos. La Argentina ha registrado una baja tasa de mortalidad relativa, con 22 fallecimientos cada millón de habitantes al 22 de junio, un resultado comparativamente mejor que otros países sudamericanos como Perú (244), Ecuador (239), Brasil (238), Chile (234), Bolivia (66) y Colombia (44).

La pandemia no sólo modificó nuestras vidas, sino que puso en debate las formas tradicionales de nuestra organización social: el peso de la economía frente al riesgo de la salud o la vida, el rol de lo público, la función del Estado, la importancia de la salud pública, entre otras. Las medidas adoptadas por el gobierno permitieron acondicionar un sistema de salud que al momento de asumir el nuevo gobierno estaba desfinanciado, con un Ministerio de Salud degradado a Secretaría, se pudieron aumentar el número de camas el número de respiradores, acondicionar la infraestructura sanitaria y evitar que colapse su capacidad de dar respuesta adecuada.

Reacción de la oposición al gobierno

En las primeras semanas de la cuarentena, cuando el temor a contagios y a muertes masivas por el coronavirus dominaba el espacio público, hubo un clima de tenue convivencia política y tregua con los poderes facticos en la disputa estructural acerca del rumbo de la sociedad argentina. Pero tanto la propuesta del bloque mayoritario de la alianza de gobierno de reclamar un aporte extraordinario a las personas muy ricas; el decreto de prohibición de despidos, la intención de avanzar en la reforma del sistema judicial, como así también, la oferta de canje de deuda en default virtual, marcaron un punto de inflexión, donde los medios, los analistas y políticos conservadores volvieron a intervenir en el espacio público con una elevada carga de violencia simbólica en contra del gobierno.

El Grupo Techint, de la familia Rocca, la más poderosa y de mayor fortuna de Argentina, desafió al gobierno al despedir 1450 trabajadores cuando se había dispuesto la prohibición de despidos. Pronto con apoyo de los medios y el ala más dura de la oposición macrista comenzaron a impulsarse marchas y banderazos en contra de las medidas sanitarias impulsadas desde el gobierno, apelando a un discurso de defensa de las libertades contra un supuesto avasallamiento por parte del gobierno. Las críticas y el posicionamiento en contra de la oferta argentina para la renegociación de la deuda en tanto muchos de esos empresarios a título personal y o de sus compañías (Techin, Clarín, por ejemplo) son también acreedores en tanto tenedores de los bonos que compraron con entusiasmo al gobierno de Macri. La respuesta de las cámaras que agrupan a grandes empresas ante la propuesta de expropiación de Vicentin una empresa en convocatoria de acreedores y con una deuda millonaria con el Banco Nación, es un ejemplo contundente del papel de conducción política de los principales grupos económicos en esta disputa con el Estado.

Una oposición minoritaria pero intensa, que con soporte en los medios de comunicación, trata de llevar el debate a un escenario de realidad virtual donde ellos representan lo mismo o más que la mayoría, según queda plasmado en el diseño de las corporaciones

mediáticas, y en un contexto de sociedad sensibilizada por la continuidad de las medidas sanitarias y sus innegables efectos económicos.

Pos- pandemia

Para la población agobiada por la pandemia, la cuestión económica no está separada de la sanitaria. Las dos van de la mano en la preocupación cotidiana y, por ese motivo, merecen atención. Pese a los esfuerzos del gobierno y la implementación de una amplia batería de herramientas de contención social y económica, el impacto sobre la economía y la evolución del mercado laboral⁵ - al igual que en la mayoría de los países - será de una importante magnitud.

La pandemia visualiza, y hasta exagera, de forma obscena las desigualdades socioeconómicas existentes. Frente a esta realidad, desde el campo popular se buscan alternativas como el impuesto a las grandes fortunas, el ingreso básico universal, el avance del feminismo en las políticas de gobierno, o en la lucha contra el cambio climático. Mientras que los sectores reaccionarios se manifiestan a diario en contra de las minorías, del estado regulador y de la justicia social.

Los choques de intereses y las demandas sociales están expuestos como pocas veces, sólo hace falta articularlos y brindar capacidad de respuesta. Es preciso estar atentos, porque esa respuesta – en el mundo - hoy parece estar llegando primero por movimientos populistas de derecha, que han mostrado una gran capacidad de articulación internacional.

Reivindicar el rol del Estado presente que acompaña al sector privado, a las familias, a los trabajadores, es parte fundamental de la reconstrucción del significado de pueblo y esto pareciera central para que el gobierno pueda llevar adelante su programa social y económico, resignificando nuestra identidad para ganar certezas frente al mar de incertidumbres. En un momento de vulnerabilidades socioeconómicas, no alcanza con buenas políticas públicas, sino que también requiere reconstruir el relato y ganar el sentido común. Las mayorías deben sentirse sujetos activos del motor de transformaciones que es hoy el estado nacional.

⁵ Entre febrero y mayo se perdieron 154.000 empleos asalariados formales en el sector privado, una caída del 2,5 por ciento, la mayor desde 2002. Casi toda esa contracción se produjo en marzo (-0,7 por ciento) y abril (-1,7 por ciento), mientras que mayo mostró una virtual estabilización (-0,1 por ciento).